

LAS TUMBAS TODAVÍA NO ESTÁN LLENAS

En la literatura turística, Ruanda era conocida como “la tierra de las mil colinas”, un país de belleza mágica enclavado en el corazón de África, con vistas imponentes y lagos cristalinos que recordaban a una versión tropical de Suiza. En el noroeste, a lo largo del macizo que separa las aguas del Congo y del Nilo, se alzan los gigantescos picos de las montañas Virunga, que alcanzan más de 4.000 metros, una cordillera volcánica cubierta de frondosas selvas en las que habitaban los gorilas de montaña famosos a raíz del trabajo de la primatóloga norteamericana Dian Fossey y su libro *Gorilas en la niebla*. Los turistas extranjeros acudían en tropel a Ruanda y aportaban una importante fuente de ingresos.

Los habitantes de Ruanda, los banyaruanda, eran conocidos por ser trabajadores y disciplinados. El país tenía una alta densidad de población, y prácticamente todas las parcelas de terreno disponibles estaban cultivadas. Plantaciones de plátanos, arboledas de eucaliptos y cultivos de café salpicaban el paisaje. La gran mayoría de los banyaruandas—más de las tres cuartas partes—eran cristianos. Mucha gente acudía a la iglesia. Las organizaciones religiosas formaban parte de la vida cotidiana y dirigían escuelas y clínicas.

Existía una estricta jerarquía gubernamental. El país estaba dividido en 11 *préfectures* dirigidas por *préfets*; 145 *communes* dirigidas por *bourgmestres*; 1.600 *secteurs* dirigidos por *conseillers*; y decenas de miles de *sous-secteurs* que comprendían pequeños grupos de viviendas. Los banyaruandas mostraban un gran respeto por la autoridad en todos los niveles. Casi no existía delincuencia y apenas había casos de prostitución.

La gestión económica del Gobierno era impresionante. Entre 1965 y 1989, el producto interior bruto aumentó casi un 5% anual; la inflación era baja; a pesar de un alto índice de crecimiento de la población que alcanzaba el 3,7% anual, se

produjeron avances en las inscripciones escolares y en la sanidad. Aproximadamente dos tercios de los hogares rurales se dedicaban a la producción de café, que constituía el puntal de las exportaciones de Ruanda. Impresionados por el compromiso del Gobierno con la ley y el orden, los países occidentales ofrecieron generosas ayudas. Bélgica, la antigua potencia colonial, fue el principal donante; Suiza colocó a Ruanda en el primer puesto de su lista de ayudas; y Francia ofreció asistencia técnica y formación militar. La ayuda extranjera constituyó una proporción cada vez mayor de la renta nacional, que pasó del 5% en 1973 al 22% en 1991.

Con todo, algo desagradable impregnaba la política de Ruanda. Desde el asentamiento de la idea de la hegemonía hutu en la década de 1950, los políticos hutus habían descrito a la minoría tutsi como un “enemigo” que trataba de imponer su poder en Ruanda. Parte clave de esta ideología era el mito de que los tutsis eran invasores que habían ocupado Ruanda en la época precolonial y habían esclavizado a los hutus. Eran, por tanto, un grupo intruso que no estaba legitimado para estar en el país. El mito se acrecentó gracias a las narraciones de viajeros europeos del siglo XIX en las que describían a la aristocracia tutsi dominante como descendientes de un pueblo “camítico”, con una cultura claramente superior a la de los indígenas hutus, y que afirmaban haber emigrado de tierras lejanas como las tierras altas de Etiopía o el Cuerno de África. A otros reinos de la región de los Grandes Lagos, como Anko-le, Bunyoro y Toro, en la actual Uganda, se les aplicó la misma “hipótesis camítica”. Cuadraba con el concepto europeo de “razas históricas” en boga en el siglo XIX. Sin embargo, en Ruanda, en lugar de difuminarse, se convirtió, según el historiador Jean-Pierre Chrétien, en “evangelio etnohistórico”, un mito incorporado a los libros de historia y esgrimido por los políticos hutus con fines propagandísticos. En 1959, el líder hutu Grégoire Kayibanda describió Ruanda como “dos naciones en un solo Estado (...) dos naciones entre las que no hay relación ni comprensión mutua, que ignoran mutuamente sus costumbres, pensamientos y sentimientos, como si habitasen en zonas separadas o viviesen en planetas diferentes”.

A pesar de conseguir el poder tras la “revolución” hutu de 1959 y 1960, los políticos hutus continuaron empleando el lenguaje del odio y la división contra la minoría tutsi para justificar su persecución. También consideraron oportuno fomentar la hostilidad contra los tutsis para reafirmar su postura en los momentos en que cundían los desacuerdos entre los clanes hutus. A principios de la década de 1990, cuando la facción hutu se encontró con mayor oposición política, trataron de mantenerse aferrados al poder, espoleando a los hutus contra la amenaza tutsi, fomentando un clima de miedo y odio, confiando en la cultura de la obediencia de los hutus para asegurarse de que se cumpliesen sus órdenes, y preparándose para el ataque con mucha antelación, armando milicias y organizando escuadrones de la muerte. El genocidio que tuvo lugar a continuación no fue causado por un antiguo antagonismo étnico, sino por una elite fanática enzarzada en una moderna lucha por el poder y por la riqueza que utilizaba el antagonismo étnico como principal arma. A pesar de que los gobiernos occidentales sabían que se estaban produciendo masacres masivas, no lograron dar los pasos necesarios para evitarlas. El resultado fue una matanza como no se había visto desde el programa nazi de exterminio de los judíos.

Poco después de la independencia de 1962, ya se produjo un presagio de la terrible violencia que vendría luego. La “revolución” hutu había provocado el éxodo de unos 130.000 tutsis a los países vecinos: Burundi, Uganda, Congo y Tanganica. Allí, en campos de refugiados, los exiliados tutsis formaron pequeños grupos insurgentes con el objetivo de reinstaurar la monarquía tutsi y haciéndose llamar *inyenzi*, un término kinyaruanda que significa ‘cucaracha’. Los ataques que realizaron a través de la frontera de Ruanda fueron infructuosos. En diciembre de 1963, sin embargo, 200 hombres armados con arcos, flechas y rifles rudimentarios, cruzaron la frontera desde Burundi, se unieron a los tutsis locales, atacaron un campamento militar, se hicieron con armamento y vehículos y se dirigieron a la capital, Kigali.

A pesar de que los invasores fueron puestos en fuga rápi-

damente, el presidente Kayibanda aprovechó la ocasión para aplastar a la oposición tutsi. “veinte destacados políticos tutsis fueron detenidos y ejecutados de manera sumaria. Radio Kigali emitió reiteradamente advertencias de que los terroristas tutsis estaban intentando reinstaurar su dominio. Los funcionarios locales recibieron instrucciones de organizar grupos de “autodefensa”. En Gikongoro, vigilantes hutus, armados con machetes, lanzas y garrotes, salieron a matar a todos los tutsis –hombres, mujeres o niños– que se cruzaran en su camino. Murieron unos 5.000 tutsis. En Shingira, cerca de la frontera con el Congo, más de 100 mujeres y niños tutsis prefirieron ahogarse en el río antes que ser masacrados por la muchedumbre hutu. El Consejo Mundial de Iglesias calculó que, en total, fueron asesinados unos 10.000 tutsis. Decenas de miles más huyeron al exilio. El efecto político de los ataques de los *inyenzi* fue un importante impulso a la menguante popularidad de Kayibanda. Un funcionario ruandés hizo una confidencia al profesor de ciencia política René Lemarchand: “Antes de los ataques de los *inyenzi*, el Gobierno estaba a punto de derrumbarse. Había enormes desacuerdos entre nosotros. No solo hemos sobrevivido a los ataques, sino que los ataques han hecho que sobrevivamos a nuestros desacuerdos”. Los activistas tutsis en el exilio pronto abandonaron sus planes. Sin embargo, Kayibanda consideró útil resucitar la amenaza tutsi cuando su régimen se vio de nuevo envuelto en dificultades políticas.

Los acontecimientos en el vecino Burundi, donde los tutsis se habían hecho con el poder, ofrecieron la oportunidad. Desde su independencia en 1962, la historia de Burundi había sido todavía más turbulenta que la de Ruanda. Dos de los primeros tres primeros ministros fueron asesinados. En poco tiempo hubo siete gobiernos. En 1965, un motín de oficiales hutus del Ejército y la *gendarmérie* originó terribles represalias contra los líderes hutus. En 1966, un golpe militar llevó al poder a un oficial tutsi, el capitán Michel Micombero, dispuesto a acabar con la “amenaza hutu” de una vez por todas. El Ejército y el Gobierno fueron purgados de miembros hutus. Los principales políticos hutus y gran cantidad de solda-

dos fueron ejecutados. Tras un levantamiento hutu en 1972, Micombero se vengó con una virulencia nunca vista hasta la fecha en el África independiente. Los hutus que tenían algún tipo de formación –profesores, líderes religiosos, empleados de banca, enfermeras, comerciantes y funcionarios– fueron apresados por el Ejército y asesinados. En una campaña que posteriormente fue calificada como “genocidio selectivo”, la clase dominante hutu fue prácticamente eliminada. Probablemente llegaron a morir 200.000 personas. Otras 200.000 huyeron a Ruanda.

Utilizando a Burundi como ejemplo de la “sed de poder” de los tutsis y de su disposición a matar para conseguirlo, Kayibanda lanzó otra nueva oleada de represión, esperando unir a los hutus. Un panfleto elaborado en 1972 por el partido en el poder declaró: “La dominación tutsi es el origen de todos los males sufridos por los hutus desde el principio de los tiempos. Es comparable a un hormiguero repleto de todas las crueldades propias de los hombres”. En lo que se denominó campaña de “purificación”, Kayibanda creó grupos de vigilancia para asegurarse de que los tutsis no excediesen la cuota del 9% que había fijado para las escuelas, la universidad, el funcionariado y todos los sectores laborales, incluidas las empresas privadas, y que se decía que representaba su proporción de la población. En algunas zonas de Ruanda, principalmente en el oeste, los tutsis llegaban a constituir el 30% de la población. El resultado fue otro éxodo masivo de tutsis.

Sin embargo, la campaña de odio de Kayibanda no fue suficiente para salvar su régimen. Como gobernaba a través de un pequeño grupo de políticos procedentes de su ciudad natal de Gitarama y daba preferencia a los clanes hutus del sur, perdió el apoyo de los hutus del norte. En 1973 fue expulsado por el jefe del Ejército, el general Juvénal Habyarimana, un norteño de Gisenyi, y fue enviado a prisión, donde murió, según se dijo de inanición. Habyarimana instauró una dictadura de partido único y sometió a la población a un control más rígido que nunca. Todos los banyaruandas, tuviesen la edad que tuviesen, incluso los bebés y los ancianos, fueron obligados a formar parte de su Mouvement Révolutionnaire Natio-

nal pour le Développement (MRND). Todos tenían que llevar una tarjeta identificativa que especificase su grupo étnico y su lugar de residencia. Nadie estaba autorizado a cambiar de residencia sin permiso oficial. El partido estaba en todas partes: cada colina tenía su célula y sus espías.

Los tutsis sufrían las mismas discriminaciones que antes, pero no más acoso. Habyarimana mantuvo el sistema de cuotas y limitó la participación de los tutsis en la vida pública. En el Ejército, los tutsis fueron inhabilitados para ascender a oficiales, y a los soldados hutus no se les permitía casarse con mujeres tutsis. En una de las paredes de su mansión presidencial en Kigali, Habyarimana tenía una fotografía en blanco y negro de cabañas tutsis en llamas, cuidadosamente etiquetada como "Apocalypse Révolution - Nov 1959", un recuerdo de los orígenes del poder hutu. Sin embargo, en la mayor parte de la época de Habyarimana, durante las décadas de 1970 y 1980, el factor tutsi tuvo una importancia marginal.

Como único candidato al cargo, Habyarimana fue elegido presidente en diciembre de 1983 y otra vez en 1988 con el 99,8% de los votos. No obstante, su mayor apoyo se limitaba a los hutus del noroeste, los bakigas, que formaban un grupo cultural diferenciado. Se habían incorporado al reino tutsi de Ruanda con ayuda de los belgas en la década de 1920, habían permanecido profundamente vinculados a sus propios clanes y miraban con desprecio a los hutus del sur por su menor compromiso con el nacionalismo hutu.

Habyarimana daba preferencia a sus compañeros del norte, especialmente a los procedentes del distrito de Gisenyi, les concedía cargos en su Gabinete, trabajos en la Administración, oportunidades económicas y becas para estudiar en el extranjero. Prácticamente todos los altos mandos del Ejército y de los servicios de seguridad procedían de Gisenyi. Gran parte de los fondos para el desarrollo se desviaron hacia el norte. Alrededor de su enérgica esposa, Agathe Kanzinga, perteneciente a un linaje hutu que había gobernado un principado independiente hasta finales del siglo XIX, se congregaba una poderosa camarilla formada por hutus del norte. Conocido en un primer momento como *le clan de la Madame* y

luego como *akazu*, una palabra kinyaruanda que significa 'la casa pequeña', el círculo de asesores de Madame Agathe incluía tres hermanos, un primo y un grupo de altos mandos del Ejército. Ricos y privilegiados, representaban el auténtico poder tras el trono de Habyarimana. A finales de la década de 1980, tras 15 años de relativa prosperidad, el régimen de Habyarimana, impulsado por cuantiosas ayudas procedentes del extranjero, se encontró cada vez con más dificultades. Una fuerte caída de los precios del café en todo el mundo redujo a la mitad los ingresos de los agricultores. La sequía arruinó la producción de alimentos. En 1989, los presupuestos del Estado tuvieron que reducirse en un 40%. En 1989 el producto interior bruto cayó un 5,7%. La escasez de tierra se hacía cada vez más acuciante. La población pasó de 2 millones de habitantes en 1940 a 7 millones en 1990. Mientras que en la década de 1950, la típica comunidad agrícola de las colinas consistía en unas 110 personas por kilómetro cuadrado, en la década de 1970 el número de personas que ocupaban la misma zona había aumentado a 280, y en la de 1990 había alcanzado una media de 420, con una *commune* del norte que había llegado a 820. La clase dominante contribuyó a agravar el problema de la falta de tierra comprando rápidamente las tierras vendidas a causa de la pobreza.

El régimen corrupto y dictatorial de Habyarimana despertaba cada vez más animadversión. En 1988, el periódico católico *Kinyamateka*, empezó a publicar artículos que trataban abiertamente temas políticos. Aunque el Gobierno respondió deteniendo a varios periodistas, otros periódicos y profesionales de la información se sumaron a la causa e informaron de la corrupción y del lujoso estilo de vida de la elite dirigente. En febrero de 1990, los obispos católicos hicieron pública una carta pastoral en la que condenaban el nepotismo, el regionalismo y la corrupción oficial. Inspirados por el ejemplo de Benín, otros destacados ruandeses reivindicaron el fin del monopolio del poder por parte del MRND, la separación entre partido y Estado, el establecimiento de una fecha para celebrar una Conferencia Nacional en la que se elaborase un proyecto de Constitución, y la celebración de elecciones libres

y justas. Los tutsis los secundaron, protestando por el sistema de cuotas y las restricciones a los empleos. Habyarimana, al igual que otros dirigentes africanos, fue invitado a asistir a la cumbre franco-africana celebrada en La Baule, en Francia, durante la cual se le advirtió de que, a partir de ese momento, la ayuda francesa dependería de que se llevaran a cabo reformas políticas. En ese momento, 1 de octubre de 1990, un ejército de tutsis ruandeses exiliados cruzó la frontera del norte desde Uganda.

Para muchos exiliados tutsis, 30 años después de que empezase su éxodo, Ruanda era poco más que un país mítico. Miles de ellos tenían recuerdos muy lejanos; otros habían nacido en campos de refugiados y nunca habían estado allí. En 1990, los exiliados en Uganda, Burundi, Zaire y Tanzania eran casi 500.000, que formaban una de las mayores comunidades de refugiados de África. La mayoría de ellos llevaba una existencia tranquila, si bien su presencia creaba algunas fricciones a escala local. En el sur de Uganda, donde los tutsis ruandeses estaban emparentados con los bahimas, antiguos gobernantes de los reinos ugandeses de Bunyoro y Buha, eran bien acogidos por los bahimas, pero no por los bauris. Durante el segundo régimen de Milton Obote, basado en el apoyo del norte, en la década de 1980, fueron abiertamente perseguidos. Decididos a contraatacar, cientos de jóvenes tutsis se unieron al Ejército de Resistencia Nacional de Yoweri Museveni en su campaña para derrocar a Obote. Entre ellos se encontraba Paul Kagame, hijo de una familia tutsi de la colina de Nyaratovu, en Gitarama, un personaje larguirucho e inteligente que, en 1961, a la edad de cuatro años, había visto cómo los hutus prendían fuego a casas tutsis antes de escapar al exilio con sus padres. Cuando Museveni tomó Kampala en enero de 1986, una cuarta parte de su ejército —unos 3.000 hombres— estaba formada por guerreros tutsis hijos de exiliados, muchos de los cuales ocupaban cargos de responsabilidad. El general Fred Rwigyema, subcomandante del Ejército, era un tutsi que había crecido en el mismo campo de refugiados que Paul Kagame. Otros miles de tutsis fueron reclutados

por el Ejército de Uganda durante los primeros años del régimen de Museveni para hacer frente a la insurgencia contra este en las regiones de Acholi, Teso y Nilo occidental. En recompensa al apoyo tutsi, Museveni anunció en julio de 1986 que los ruandeses que hubieran residido en Uganda durante más de diez años tendrían derecho automáticamente a obtener la nacionalidad ugandesa.

Mientras tanto, las organizaciones en el exilio hacían campaña reivindicando el derecho de los tutsis a volver a casa. Habyarimana respondió argumentando que Ruanda ya tenía exceso de población y no podía absorber más habitantes. Durante una reunión celebrada en Kampala en 1987, los líderes en el exilio lanzaron el Frente Patriótico de Ruanda (RPF). Su objetivo, decían, no era solo promover el regreso de los tutsis, por la fuerza si fuera necesario, sino apoyar la causa de la reforma política en Ruanda. No buscaba volver a imponer el gobierno tutsi en Ruanda, ni reinstaurar la monarquía tutsi, sino derrocar al corrupto y ruinoso régimen y establecer un gobierno democrático. Entre sus líderes políticos había hutus, pero predominaban los tutsis; su brazo paramilitar estaba formado casi en su totalidad por tutsis, muchos de los cuales poseían formación militar y experiencia en combate. El movimiento cobró fuerza como resultado de la reacción violenta de los ugandeses ante el prominente papel desempeñado por los exiliados ruandeses. Cuando, en 1988, Museveni decidió prescindir de los servicios del general Rwigyema, el RPF se hizo con un famoso y respetado líder militar. En agosto de 1990, después de que dos miembros de la elite de Kigali huyesen a Kampala y explicasen que el régimen de Habyarimana estaba al borde del colapso, dividido entre el norte y el sur y sumido en la corrupción, Rwigyema se convenció de que había llegado el momento de intentar derrocarlo. De la noche a la mañana, el 30 de diciembre, unos 4.000 tutsis desertaron del Ejército ugandés, llevándose consigo armas y material.

La invasión de octubre fue un desastre. Nada salió como estaba planeado. Rwigyema resultó muerto al segundo día, lo que dejó a sus compañeros conmocionados y desmoralizados. Además, la invasión hizo que Francia entrase en escena.

Los franceses habían ambicionado involucrarse en Ruanda desde la década de 1970. A pesar de que Ruanda era una excolonia belga, la consideraban un miembro natural de la familia franco-africana —*la francophonie africaine*—, el grupo de Estados africanos apoyados por Francia con el objetivo de promover y proteger la lengua, el comercio y la cultura franceses. Los 17 Estados francófonos de África constituían la única zona del mundo en la que Francia conservaba suficiente influencia para sustentar sus reivindicaciones de ser considerada una potencia media. Lo que hacía que Ruanda fuese especialmente importante era que, junto con Burundi, estaba situada a lo largo de la frontera entre el África francófona y el África anglófona.

Desde que, en 1898, se produjo un incidente en el pueblo sudanés de Fashoda, cuando las fuerzas británicas impidieron a una expedición francesa establecer una franja de territorio francés en dirección este desde Dakar hasta Yibuti, los franceses se habían mantenido alerta para evitar que los británicos invadiesen lo que ellos consideraban su propio patio trasero, *le pré carré*.

En sus memorias, el general De Gaulle enumeró los desastres sufridos por Francia durante su infancia que le habían llevado a dedicarse a defender la *grandeur* de Francia: el primero de la lista era el incidente de Fashoda. “El síndrome de Fashoda” era un componente básico de la política de Francia en África. Con el fin de garantizar que los problemas de África recibían la atención debida, en la oficina presidencial francesa estaba incluida una unidad especial —*Cellule Africaine*— con amplias atribuciones, para poder tratar desde temas de inteligencia hasta sobornos. En 1990, la *Cellule Africaine* estaba dirigida por Jean-Cristophe Mitterrand, el hijo del presidente, conocido popularmente como *Papa m'a dit*, o “Papá me ha dicho”.

A primera vista, la invasión de un grupo de rebeldes de Uganda, con uniformes y armas del Ejército ugandés, era una excelente excusa para la intervención de Francia. Se enmarcaba exactamente en la idea francesa de “complot anglosajón”. Los franceses creyeron a pies juntillas el argumento esgrimi-

do por Habyarimana de que la auténtica finalidad de la invasión era restablecer el gobierno tutsi en Ruanda. Sin pensárselo dos veces, el presidente Mitterrand, amigo personal de Habyarimana, telefoneó a la *Cellule Africaine* al palacio del Elíseo el 2 de octubre —al día siguiente de la invasión— para hablar con Jean-Cristophe Mitterrand. La llamada le tranquilizó. Gérard Prunier, un experto francés en ciencias políticas que estuvo presente durante la conversación, recordó más adelante que Jean-Christophe Mitterrand dijo, guiñando un ojo: “Le vamos a enviar a unos cuantos chicos al viejo Habyarimana. Vamos a echarle un cable. En cualquier caso, en dos o tres meses todo habrá acabado”.

Aquella decisión tendría consecuencias terribles. Para los franceses significó involucrarse cada vez más en su apoyo a un régimen con intenciones genocidas.

El primer contingente de tropas francesas llegó a Kigali procedente de su base en la República Centroafricana el 4 de octubre, aparentemente con el fin de proteger a los expatriados franceses y organizar su evacuación. Habyarimana también consiguió la presencia de tropas de Bélgica y Zaire, cuyo presidente, Mobutu, era un importante aliado. Con la intención de dar dramatismo a la amenaza a la que se enfrentaba, Habyarimana organizó un falso ataque de las fuerzas gubernamentales a Kigali para acusar a las “tropas enemigas”, cosa que hizo que el embajador francés informase rápidamente de que había “graves enfrentamientos” en la capital. El Gobierno francés respondió enviando más tropas a Kigali. Con ayuda extranjera, las fuerzas gubernamentales consiguieron hacer retroceder a los rebeldes hasta las zonas fronterizas. Si existía alguna amenaza contra el régimen de Habyarimana, esta se desvaneció rápidamente. Las tropas de Mobutu, después de arrasar la ciudad, se retiraron enseguida. Bélgica también retiró sus tropas ya que no estaba muy convencida de la operación. Los franceses, no obstante, permanecieron allí, aprovechando la ocasión para erigirse en los principales defensores de Ruanda.

En cuanto Habyarimana consiguió el apoyo de tropas extranjeras, dio rienda suelta a una oleada de represión contra

sus adversarios. Utilizando como pretexto el falso ataque de las "tropas enemigas" en Kingali, ordenó la detención de alrededor de 13.000 personas, a las que encarceló sin cargos. Muchas de ellas fueron torturadas; docenas murieron. Volviendo a las tácticas utilizadas en la década de 1960, uno de sus ministros declaró que los tutsis eran *ibiyitso*, término kinyaruanda que significa 'cómplices' y que adquirió triste fama. "Para organizar un ataque de esa envergadura era necesaria gente de confianza [que trabajara desde dentro]", dijo. "Los ruandeses del mismo grupo étnico ofrecían más posibilidades que otros". Pero, además de a los tutsis, el término se aplicaba también a los hutus que se oponían al régimen de Habyarimana. En la radio nacional, el ministro de Defensa alentó a la población a "averiguar el paradero de los infiltrados y detenerlos". Centenares de tutsis fueron asesinados en ataques vengativos organizados por los funcionarios locales. En diciembre de 1990, los embajadores europeos advirtieron en un informe conjunto: "El rápido deterioro de las relaciones entre los dos grupos étnicos, los hutus y los tutsis, hace que exista un riesgo inminente de que se produzcan terribles consecuencias para Ruanda y para toda la zona".

Con la ayuda de Francia, Habyarimana llevó a cabo una enorme expansión de las Fuerzas Armadas de Ruanda. Desde el momento de la invasión, el Ejército pasó de estar formado por una fuerza de 9.000 hombres en octubre de 1990 a 28.000 en 1991. Francia aportó personal de instrucción, expertos en contrainsurgencia y una enorme cantidad de armas. Financió, armó y entrenó la Guardia Presidencial, una fuerza de elite cuyos miembros fueron reclutados exclusivamente en el distrito natal de Habyarimana. También facilitó contratos con Egipto y Sudáfrica para obtener armamento. Se gastaron aproximadamente 100 millones de dólares en suministros de armas, una cantidad enorme para un país pequeño y empobrecido. Gran parte del dinero procedía de fondos de ayuda internacional —créditos rápidos del Programa de Ajuste Estructural— destinados al desarrollo económico.

Mientras tanto, los opositores de Habyarimana, sin dejarse intimidar por su campaña de represión, continuaron lu-

chando en favor de la reforma política. Habyarimana, presionado tanto por los países donantes occidentales como por los políticos locales, acabó accediendo a abandonar el sistema de partido único. En junio de 1991 se aprobó una enmienda a la Constitución que legalizaba la pluralidad de partidos políticos. En cuestión de meses aparecieron 16 partidos de la oposición. Una vez asentados, exigieron participar en el gobierno. Al principio, Habyarimana se resistió, pero, tras una serie de manifestaciones multitudinarias a principios de 1992, se vio obligado a entablar negociaciones. El resultado fue que, en abril de 1992, Habyarimana formó un gobierno de coalición en el que asignó los ministerios clave a su propio partido, pero concedió otros cargos del Gabinete, incluido el de primer ministro, a partidos de la oposición.

Decididos a forzar la reforma y reorganizar totalmente la antigua Administración del MRND, los partidos de la oposición unidos en coalición entraron en contacto con rebeldes del RPF. Desde su retirada a las montañas Virunga, el RPF se había reagrupado alrededor de un nuevo líder, Paul Kagame. En el momento de la invasión en 1990, Kagame, comandante del Ejército ugandés, estaba asistiendo a un curso de instrucción en Fort Leavenworth, en Estados Unidos. A su regreso a Uganda había abandonado el Ejército para unirse a los rebeldes. A finales de 1991 había logrado transformar el RPF en una disciplinada fuerza guerrillera de 5.000 hombres. Sin embargo, a pesar de su capacidad para realizar ataques relámpago en zonas del norte de Ruanda, el RPF no gozaba de gran apoyo popular. Por consiguiente, Kagame se mostró dispuesto a entablar conversaciones con los miembros de la coalición. En julio de 1992 se firmó un alto el fuego. Las presiones internacionales hicieron que aceptara participar en conversaciones de paz en Arusha, Tanzania.

Toda esta serie de acontecimientos —el final del sistema de partido único, la formación de un gobierno de coalición con partidos reformistas y el acercamiento a los rebeldes tutsis— enfureció a los supremacistas hutus. La camarilla de Madame Agathe, la *akazu*, planeó en secreto una contraofensiva para recuperar el control. Ese movimiento pasó a ser conocido

como Poder Hutu. Su objetivo no era solamente acabar con la amenaza tutsi, sino limpiar Ruanda de hutus *ibytso*.

En el Ejército, los servicios de seguridad, la Administración, las universidades y los medios de comunicación, se creó una red de apoyo conocida como *le réseau zéro* para promover la causa del Poder Hutu. Los activistas lanzaron su propio partido político, la Coalition pour la Défense de la République (CDR), a través del cual atacaron la actitud “blanda” del Gobierno hacia los hutus y sus “colaboradores”. Militantes del MRND formaron una milicia juvenil a la que llamaron Interahamue, palabra kinyaruanda que significa ‘los que trabajan juntos’. La CDR también formó su propia milicia juvenil, a la que denominó Impuzamugambi, ‘los que tienen un único fin’. Los jóvenes sin perspectivas laborales eran reclutados con facilidad mediante promesas de tierras, empleos y otras recompensas que obtendrían de la campaña. Dentro del Ejército, una sociedad secreta, *amasusu*, se aseguraba de que las dos milicias recibiesen armas y entrenamiento. Los escuadrones de la muerte se pusieron manos a la obra.

Se prestó mucha atención en identificar al “enemigo”. Un memorándum del Ejército elaborado en 1992 dividió al enemigo en dos categorías: el enemigo principal y los cómplices del enemigo. El enemigo principal se definía como:

Los tutsis de dentro y de fuera del país, extremistas y nostálgicos del poder que NUNCA han reconocido y NUNCA reconocerán los hechos de la revolución social de 1959 y que quieren reconquistar el poder por todos los medios, incluido el uso de las armas.

A los cómplices del enemigo se los definía como todo aquel que apoyase al enemigo principal. Entre los grupos de los cuales se decía que el enemigo se abastecía se incluían refugiados tutsis, tutsis que se encontraban en el país y hutus descontentos. El jefe del Estado Mayor del Ejército envió el memorándum a todos los comandantes de sector, con instrucciones de que se distribuyese lo más ampliamente posible.

Las embajadas occidentales interceptaron la información sobre la “red cero” y sus objetivos. La primavera de 1992, el

embajador de Bélgica informó: “Este grupo secreto planea el exterminio de los tutsis de Ruanda para acabar, a su manera y de una vez por todas, con el problema étnico, y aplastar a la oposición hutu”. En agosto de 1992, el jefe del servicio nacional de información, Christophe Mfizi, un alto mando del MRND, dimitió tras 15 años en el cargo, advirtiendo de las actividades de la “red cero” en una carta abierta. El Estado, dijo, estaba controlado por una oligarquía del norte, que lo exprimía en su propio beneficio.

La prensa fomentaba constantemente el odio étnico. De los 42 nuevos periódicos que aparecieron en 1991, al menos 11 tenían vinculaciones con la *akazu*. Al frente de la campaña de odio estaba Hassan Ngeze, editor de *Kangura*, un estafador de poca monta con habilidad para la propaganda vulgar. En un memorable artículo publicado en diciembre de 1990, poco después de la invasión del RPF, Ngeze diseñó la doctrina de la pureza hutu, enumerando “los diez mandamientos hutus”. El primero de ellos establecía que cualquier hutu que se casase o se hiciese amigo de una mujer tutsi, o contratase a una mujer tutsi como secretaria o “concubina” sería considerado traidor, ya que todas las mujeres tutsis trabajaban únicamente en interés de su grupo étnico. Por razones parecidas, cualquier hutu involucrado en tratos comerciales con tutsis también sería considerado traidor. A los hutus se les indicaba que se mantuviesen “firmes y atentos contra el enemigo tutsi común”. Solamente se podía confiar en los hutus para ocupar cargos estratégicos en el Gobierno, la Administración y la economía. Solo los hutus podían entrar a formar parte de las Fuerzas Armadas. Los “diez mandamientos” de Ngeze se distribuyeron ampliamente ante el clamor popular. Habyarimana defendió su publicación. Los líderes comunitarios los leyeron en mítines públicos. El mandamiento que se citaba con más frecuencia era el octavo: “Los hutus han de dejar de tener compasión de los tutsis”.

Uno de los principales objetivos de la propaganda era fomentar el miedo a que los tutsis, con el fin de recuperar el poder, estuvieran dispuestos a masacrar a los hutus. En diciembre de 1990, *Kangura* afirmó que los tutsis estaban preparados

para iniciar una guerra en la que “no habría supervivientes”. En un panfleto redactado por el profesor universitario y funcionario del MRND, Léon Mugesera, se afirmó que el RPF planeaba “reinstaurar la dictadura de la minoría tutsi extremista” por medio de “un genocidio que exterminaría a la mayoría hutu”.

Un discurso en el que se incitaba al asesinato, pronunciado por Mugesera ante los militantes del MRND en Kabaya, no lejos de casa de Habyarimana, en el distrito de Gisenyi, tuvo especial repercusión. La radio nacional emitió fragmentos; se distribuyeron casetes por todas partes. El objetivo de Mugesera no eran solo los *inyenzi*, las “cucarachas” del RPF, sino también sus cómplices, los partidos políticos contrarios a Habyarimana que abogaban por una negociación con el RPF:

Los partidos de la oposición han pactado con el enemigo (...). Han planeado socavar nuestras Fuerzas Armadas (...). La ley es muy clara en este punto: “Cualquier persona culpable de realizar actos tendentes a debilitar la moral de las Fuerzas Armadas será condenada a muerte”. ¿A qué estamos esperando? (...). ¿Y qué pasa con sus cómplices (*ibitso*), que envían a sus hijos al RPF? ¿A qué esperamos para librarnos de esas familias? (...). Me gustaría decirles que pedimos que esa gente figure en una lista y sea llevada a los tribunales para ser juzgada ante nosotros. Si [*los jueces*] se niegan (...) tendremos que ser nosotros quienes exterminemos a esa escoria (...). En 1959 cometimos el terrible error de dejarles [*a los tutsis*] salir (...). Pertenecen a Etiopía y vamos a encontrar un atajo para que vuelvan allí arrojándolos al río Nyabarongo [*que fluye hacia el norte*]. Tengo que insistir en este punto. Tenemos que actuar. ¡Acabemos con todos ellos!

Argumentando que el objetivo del enemigo era el exterminio, instó al público a “levantarse..., a levantarse de verdad” en defensa propia. Y acabó con una última advertencia: “Sabed que la persona a la que no le cortéis el cuello ahora será la que os lo corte a vosotros luego”.

En 1992 se produjo una serie de asesinatos organizados. Grupos formados por miembros de la Interahamue, la *gen-*

darmerie y campesinos hutus se unieron para atacar las casas de los tutsis. Los tutsis fueron quemados en sus casas y arrojados a los ríos. Los que intentaron defenderse fueron desarmados por soldados del Gobierno. Empleando una terminología que acabaría siendo demasiado habitual, a los campesinos se les decía que “despejasen el bosque”; a la matanza de mujeres y niños se la describía como “arrancar las malas hierbas de raíz”. Se calcula que murieron aproximadamente 300 personas; más de 3.000 huyeron de la zona.

Un informe sobre la vulneración de los derechos humanos en Ruanda, publicado en marzo de 1993 por un grupo de expertos internacionales en la materia procedentes de diez países, consideraron que Habyarimana y “su círculo inmediato” eran responsables de una serie de masacres, torturas, detenciones ilegales y otros abusos contra los tutsis y otros miembros de la oposición, realizados durante un periodo de dos años. A pesar de la naturaleza alarmante del informe, este no despertó gran inquietud en el plano internacional. Francia prosiguió con su programa de apoyo al Ejército y a la Guardia Presidencial.

Tras un año de retrasos y evasivas, Habyarimana fue por fin obligado a firmar un acuerdo de paz con el RPF. En 1993, Ruanda se hallaba en situación de quiebra, estaba inundada de refugiados y dependía del envío de alimentos. Los donantes occidentales advirtieron de que no llegarían más fondos a menos que Habyarimana firmase. Los acuerdos de Arusha de agosto de 1993 previeron el establecimiento de un gobierno amplio y diverso que incluyese a Habyarimana y a sus aliados, a los partidos de la oposición y al RPF, que se prolongaría por un periodo máximo de 22 meses hasta que se celebrasen elecciones y se instaurase un gobierno elegido democráticamente. Mientras tanto, el Ejército ruandés y las fuerzas del RPF se reducirían e integrarían. Como primer paso, un batallón formado por 600 soldados del RPF se emplazaría en Kigali para garantizar la seguridad de los miembros del Gobierno pertenecientes al RPF. Una fuerza pacificadora de las Naciones Unidas se desplegaría para ayudar en el proceso.

Habyarimana firmó los acuerdos de Arusha solamente para ganar tiempo. La *akazu* estaba totalmente en contra. Tanto para los oficiales del Ejército como para los soldados los acuerdos implicaban desmovilización: las tropas del Gobierno constituirían solo el 60% de un ejército reducido; los altos mandos se repartirían equitativamente con el RPF; la Guardia Presidencial quedaría abolida. En total, unos 16.000 soldados serían desmovilizados. Para el MRND, que, en su día, había gobernado Ruanda sin oposición, los acuerdos de Arusha significaban aceptar únicamente cinco cargos de 19 posibles en el gabinete ministerial, el mismo número que los cargos reservados para el RPF. Durante las negociaciones en Arusha, un alto funcionario del RPF se topó con el coronel Théoneste Bagosora, un destacado miembro de la *akazu*, en el ascensor de un hotel, rodeado de maletas. Al preguntarle por qué se marchaba, Bagosora respondió que regresaba a Ruanda para preparar el *apocalypse deux*, el segundo Apocalipsis.

Las perspectivas de un resultado pacífico en Ruanda se vieron truncadas solo dos meses más tarde, como consecuencia de los acontecimientos en el vecino Burundi. Tras un periodo de reforma política, Burundi había elegido a su primer presidente hutu, el ingeniero Melchior Ndadaye, en junio de 1993. Cuatro semanas más tarde, en unas elecciones parlamentarias consideradas libres y justas, el partido Frodebu de Ndadaye obtuvo 65 de los 81 escaños posibles con un 71% de los votos. Ndadaye, moderado convencido, nombró primer ministro a un economista tutsi de la oposición y formó un gabinete ministerial equilibrado desde el punto de vista político y étnico. El 21 de octubre fue secuestrado por extremistas tutsis oficiales del Ejército, conducido a un campamento militar y asesinado. Su muerte provocó matanzas indiscriminadas entre hutus y tutsis. Unas 150.000 personas murieron; alrededor de 300.000 hutus huyeron hacia el sur de Ruanda, y divulgaron historias de masacres y torturas.

Para los supremacistas hutus de Ruanda, la muerte de Ndadaye fue una prueba irrefutable de que los tutsis querían alcanzar la dominación absoluta. Para los hutus, la única alternativa era mantener el poder o aceptar el vasallaje, como

en Burundi. Los partidos hutus moderados, que antes eran partidarios de acatar los acuerdos de Arusha, empezaron también a poner en duda las intenciones de los tutsis, temerosos de que estos los utilizaran como un caballo de Troya para lograr sus propósitos. Las facciones conservadoras hutus se unieron al Poder Hutu.

La propaganda en contra de los tutsis se intensificó. La *akazu* lanzó una nueva emisora de radio –Radio-Télévision Libre des Mille Collines–, aparentemente con la intención de entretener a sus oyentes con una mezcla de música pop, cotilleos, rumores y llamadas de los oyentes, pero en realidad pretendía prepararlos para el genocidio. De los 50 fundadores originales, 40 procedían de las tres *préfectures* del norte de Ruanda. Entre ellos se encontraban Habyarimana, varios miembros de su familia, representantes del MRND y de la CDR y un famoso músico, Simon Bikindi, conocido por sus agresivas canciones antitutsis. A pesar de que nominalmente era privada, Radio Mille Collines fue autorizada a emitir en las mismas frecuencias que la radio nacional, Radio Ruanda, entre las 8 y las 11 de la mañana, mientras aquella no emitía.

Se elaboró un plan coordinado de autodefensa. Su principal artífice fue el coronel Bagosora, jefe de Administración del Ejército. Nacido en 1941 en el norte, en el seno de una familia hutu de clase media –cristiana y acomodada, según su propia descripción– había dedicado su vida al Ejército, y asistido a cursos de entrenamiento en Bélgica y Francia. Igual que sus compañeros de conspiración, estaba movido por un profundo odio hacia los tutsis. En un ensayo escrito en el exilio en 1995 para justificar el genocidio, describió a los tutsis como “los maestros del engaño”, “dictatoriales, crueles y sanguinarios”, “arrogantes, astutos y escurridizos”. “Nunca habían tenido un país que les permitiese constituirse en pueblo”, pero, en cambio, habían tratado con arrogancia de imponer su supremacía sobre los legítimos habitantes locales.

Bagosora procedió a establecer unidades paramilitares “de autodefensa” en cada *commune* del país. Fueron entrenadas por el Ejército y la Policía Comunal y recibieron instrucciones de actuar de manera coordinada con las autoridades milita-

res, los concejales locales, la Policía Local y otras milicias. Bagosora organizó la distribución de armas de fuego y enormes cantidades de machetes. Entre enero de 1993 y marzo de 1994 Ruanda importó más de 500.000 machetes, el doble de los importados en años anteriores y suficientes para armar a uno de cada tres hutus adultos de Ruanda. Uno de los principales importadores fue Félicien Kabuga, un adinerado empresario cuya hija estaba casada con uno de los hijos de Habyarimana, y uno de los principales financieros tanto de la Interahamwe, como del semanario *Kangura*. A finales de 1993, arsenales de armas de fuego, granadas, machetes y hachas estaban ocultos en la mayoría de las *communes*. Mientras tanto, grupos de milicias como la Interahamwe se afanaban en las tareas de instrucción y reclutamiento. Se elaboró gran cantidad de listas en las que se identificaba a personas consideradas “enemigas” y a sus cómplices.

* * *

Mientras tenían lugar estas preparaciones, la maquinaria de las Naciones Unidas responsable de operaciones para el mantenimiento de la paz iba poniéndose en marcha poco a poco. Los acuerdos de Arusha habían previsto que una fuerza encargada del mantenimiento de la paz —la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR)— se desplegara en Ruanda en septiembre; sin embargo, desacuerdos acerca de su alcance y magnitud hicieron que se retrasara varios meses. Estados Unidos tenía interés en poner freno a los crecientes costes de mantenimiento de la paz de la ONU y propuso inicialmente una fuerza formada por no más de 500 hombres. Un experto militar de la ONU recomendó un mínimo de 8.000. Roméo Dallaire, el coronel canadiense elegido comandante de la UNAMIR, solicitó 4.500. El 5 de octubre, dos días después del incidente del Black Hawk derribado en Somalia, el Consejo de Seguridad autorizó una versión reducida y económica consistente en 2.548 hombres y un mandato limitado. Mientras que los acuerdos de Arusha habían propuesto una fuerza que “garantizase la seguridad general”, el Consejo de Seguridad, consciente del embrollo somalí, habló

específicamente de una fuerza que “contribuyese” a la seguridad no de todo el país, sino solamente en Kigali. Mientras que los acuerdos preveían que los encargados del mantenimiento de la paz “ayudarían a localizar alijos de armas y a neutralizar a bandas armadas en todo el país” y “ayudarían a recuperar todas las armas distribuidas a los civiles o adquiridas ilegalmente por estos”, el Consejo de Seguridad anuló estas disposiciones. El presupuesto de la UNAMIR no fue aprobado oficialmente hasta abril de 1994.

A finales de diciembre, Dallaire había conseguido reunir una fuerza de casi 1.300 personas encargadas del mantenimiento de la paz en Ruanda. Entre ellas había 400 paracaidistas belgas enviados desde Somalia. Sin embargo, el grueso del contingente de la UNAMIR estaba formado por soldados de Bangladesh, con poca preparación, mal equipados y sin ninguna experiencia operativa. La operación de la UNAMIR se transformó rápidamente en una pesadilla desde el punto de vista logístico. Dallaire no disponía de suficientes vehículos, combustible, municiones, radios, alambradas, ayuda médica e incluso dinero de bolsillo. “Pasé casi todo el tiempo luchando contra el mecanizado sistema de la ONU y todas sus tonterías”, recordó. “Pedíamos linternas y, con un gran retraso, llegaban sin pilas (...). Como nos ocupábamos de las necesidades más inmediatas no veíamos lo que se nos avecinaba en el futuro”.

Aún peor, Dallaire no disponía de un servicio de inteligencia. Cuando lo solicitó a la sede central de la ONU, su petición fue rechazada. Se le dijo que un servicio de inteligencia era contrario a la política de mantenimiento de la paz. Como resultado de ello quedó, según sus propias palabras, “ciego y sordo en medio del campo”. A pesar de que diplomáticos occidentales de Kigali estaban al corriente de que se estaba fraguando una situación de violencia masiva, casi nunca se lo comunicaron a la UNAMIR. Un análisis de la CIA realizado en enero de 1994 en el que se predecía el fracaso de los acuerdos de Arusha y la inminencia de hostilidades en las cuales moriría al menos medio millón de personas, no se hizo público hasta que el genocidio hubo finalizado. “Muchas potencias

mundiales estaban presentes, con sus embajadas y sus agregados militares”, dijo Dallaire. “Y que no me digan que esos cabrones no tenían mucha información. No me dieron nunca esa información, jamás”.

Las señales eran cada vez más inquietantes. Tras una oleada de asesinatos en las *communes* del norte, un grupo de oficiales disidentes del Ejército de Ruanda envió una carta a Dallaire advirtiéndole de que había planeadas más matanzas y que destacados políticos de la oposición figuraban entre los objetivos de los asesinos. La conspiración, decían, estaba encabezada por Habyarimana junto a un puñado de oficiales del Ejército de su región natal. Ellos mismos habían formado parte del complot, pero ya no querían tener nada que ver con él. Después de llevar a cabo su propia investigación sobre los asesinatos, Dallaire informó al cuartel general de la ONU el 6 de enero de 1994:

La forma en que se realizaron, su ejecución, su coordinación, su forma de encubrirlos y sus motivaciones políticas nos hacen creer firmemente que los autores de esos hechos malvados estaban bien organizados, bien informados, bien motivados y preparados para cometer asesinatos de manera premeditada. No tenemos razones para creer que esos actos no puedan y no vayan a repetirse en cualquier parte del país, donde proliferan las armas y predominan las tensiones étnicas.

Su solicitud de refuerzos fue rechazada.

En una reunión secreta celebrada el 10 de enero entre el jefe del contingente belga, el coronel Luc Marchal, y Jean-Pierre Twatzinze, un comandante de la Interahamue que quería desertar, se descubrieron más detalles acerca de la conspiración. Twatzinze, exmiembro de la guardia de seguridad del presidente, describió cómo la Interahamue había entrenado a 1.700 hombres en sesiones de tres semanas en campamentos militares de Ruanda. La instrucción se centró en la disciplina, armas, explosivos, combates cuerpo a cuerpo y tácticas. Al principio había pensado que el objetivo de la instrucción era permitir que la Interahamue pudiese defender Kigali contra el RPF. Sin embargo, desde la llegada de la UNAMIR en diciem-

bre se le había ordenado elaborar listas de todos los tutsis de Kigali. Ahora estaba seguro de que era para exterminarlos. Desde la instrucción, los miembros de la Interahamue se habían repartido en grupos de cuarenta personas por toda Kigali. Eran capaces, dijo, de matar hasta a 1.000 tutsis en 20 minutos. También afirmó que existían planes para asesinar a los belgas encargados del mantenimiento de la paz con el fin de provocar el fracaso de la misión. Él mismo había distribuido armas y conocía la ubicación de los arsenales en el cuartel general del MRND. Estaba dispuesto a mostrar los alijos de armas a la UNAMIR y a darles más información, dijo, a cambio de contar con la protección de la ONU en el extranjero para él y su familia.

Cuando Dallaire conoció la oferta de Twatzinze tomó gustoso la iniciativa. En un telegrama en clave enviado a Nueva York el 11 de enero en el que daba todo tipo de detalles sobre la información de “Jean-Pierre”, Dallaire explicó que su plan era hacerse con las armas en 36 horas. “Si se quiere, se puede. Hagámoslo. [*Peux ce que veux. Allons-y*]”. También recomendó que se le encontrase a Jean-Pierre un camino seguro para salir de Ruanda. Sin embargo, la sede central de la ONU bloqueó la operación. Dallaire fue informado de que la incautación de armas iba más allá del mandato de la ONU. A medida que iba aumentando la violencia, realizó varios intentos de convencer a la oficina central de la ONU de que autorizase la incautación de armas, advirtiéndole una y otra vez de que la Interahamue estaba planeando una campaña de “limpieza étnica”. El 3 de febrero comunicó a Nueva York:

Podemos esperar manifestaciones más frecuentes y violentas, más ataques con armas y granadas a grupos políticos y étnicos, más asesinatos y, con bastante probabilidad, ataques directos contra las instalaciones de la UNAMIR. Cada día que pasa sin que se autoricen operaciones de recuperación de armas disuasorias contribuye al empeoramiento de la situación de seguridad y, si se continúan distribuyendo armas, puede dar como resultado la incapacidad de la UNAMIR para llevar a cabo su mandato en todos los aspectos (...) y poner en grave peligro la seguridad del personal militar y civil de la ONU y de la población en general.

No obstante, la sede central de la ONU se mantuvo firme en su negativa. Uno de los obstáculos era la postura adoptada por el secretario general de la ONU, Boutros Boutros Ghali. Como viceministro de Asuntos Exteriores de Egipto había establecido estrechos vínculos con el régimen de Habyarimana; había visitado Ruanda en dos ocasiones, había negociado un acuerdo de cooperación con Ruanda y había sacado adelante un envío de armamento, anulando una prohibición previa impuesta por Egipto. Como secretario general nombró como su representante especial en Ruanda a un exministro camerunés, Jacques Booh Booh, amigo personal y francófilo, que adoptó una postura claramente prohutu y se dedicó a dar una versión optimista de los acontecimientos en los informes que enviaba a Nueva York. Booh Booh no tardó en enfrentarse a Dallaire, prefirió rodearse de un grupo de consejeros franco africanos y no dejó pasar la oportunidad de minar la credibilidad de Dallaire en Nueva York. Por consiguiente, en Nueva York, Dallaire era considerado un disidente que exageraba los problemas de Ruanda.

Otra dificultad más fue el impacto causado por la debacle somalí. El personal de la ONU temía que otro fracaso condujese al colapso de la ONU. “Éramos cautelosos a la hora de interpretar nuestro mandato y dar instrucciones porque no queríamos que sucediese lo mismo que en Somalia”, admitió posteriormente el alto funcionario Iqbal Riza. A los hutus extremistas, sin embargo, la evidente inmovilidad de la ONU les animó a seguir adelante. “Lo peor que pudimos hacer fue permanecer quietos mirando, sin reaccionar”, recordó el coronel Marchal.

Entre tanto, el proceso político se había estancado. En principio se estableció que en enero de 1994 se instauraría un gobierno provisional. Sin embargo, Habyarimana cuestionó las interpretaciones de los acuerdos de Arusha una y otra vez, obstruyendo deliberadamente cualquier avance. En la sombra, la *akazu* no tenía intención de renunciar al poder. La instauración del gobierno provisional se aplazó una y otra vez, primero hasta febrero, luego hasta marzo y luego hasta principios de abril.

Día tras día, Radio Mille Collines continuaba con sus emisiones fomentando la división y los rumores. Un locutor hizo un llamamiento al asesinato de la primer ministro provisional, Agathe Uwilingiyimana, una política demócrata hutu crítica con la camarilla de Habyarimana. Una y otra vez sonaba una canción de Simon Bikindi en la que suplicaba a sus compañeros hutus –los *bene sebahinzi*, los ‘hijos de los campesinos’– que defendiesen sus derechos y protegiesen los logros de la revolución de 1959:

...el vasallaje, el látigo, el azote, el trabajo forzado que agota al pueblo (...) han desaparecido para siempre. Vosotros, la inmensa mayoría [*rubanda nyamuinshi*], permaneced atentos (...) recordad que este mal ha de ser expulsado lo más lejos posible para que nunca vuelva a Ruanda.

El estribillo de la canción se repetía sin fin, como un mantra –“una herencia que se ha de mantener cuidadosamente (...) y transmitirse para la posteridad”.

El semanario *Kangura* contribuyó a aumentar el clima de miedo y desconfianza. En enero acusó a la UNAMIR y al contingente belga de Kigali de ponerse del lado del RPF, y predijo que en marzo empezaría una guerra. “Si el RPF ha decidido matarnos, entonces matémonos unos a otros. Que lo que está ardiendo entre en erupción”, se publicó en el periódico. “Las masas se levantarán con ayuda del Ejército y correrán ríos de sangre”.

Con todo, a Habyarimana le quedaban cada vez menos opciones. Tanto los gobiernos occidentales como los africanos insistían en que se pusiera en práctica lo establecido por los acuerdos de Arusha. Los líderes de África oriental se lamentaban de que los retrasos ponían en peligro la estabilidad de toda la región. Los políticos demócratas hutus, creyendo que la presencia de la UNAMIR los protegería, exigieron cada vez más abiertamente la puesta en práctica de los acuerdos. Al mismo tiempo, Habyarimana recibía ataques de los extremistas de la *akazu* por haber firmado los acuerdos de Arusha en primera instancia. En marzo, *Kangura* publicó una ca-

ricatura de Habyarimana cargando con el líder del RPF, Paul Kagame, mientras le decía: "He hecho todo lo que he podido para que los tutsis estéis mejor". En el artículo que la acompañaba, Hassan Ngeze predijo la inminente muerte de Habyarimana en un incidente público. "A nadie le gusta la vida de Habyarimana tanto como a él mismo", escribió Ngeze. "Lo importante es decirle cómo será asesinado". El 3 de abril, Radio Mille Collines advirtió de que estaba a punto de suceder "una cosita". El 6 de abril, Habyarimana asistió a una cumbre de líderes africanos en Dar es Salam. Una vez más, tuvo que hacer frente a un aluvión de críticas por eludir los acuerdos de Arusha. A pesar de que rara vez viajaba de noche, insistió en volar a Kigali después de la reunión. Su jet Falcon, regalo del presidente Mitterrand, con una tripulación de tres personas, se aproximó al aeropuerto de Kigali alrededor de las ocho y cuarto de la noche. A bordo, junto a Habyarimana, se encontraban siete altos cargos del Gobierno y el presidente de Burundi, que había pedido a Habyarimana que le llevase. El avión trazó un círculo y, cuando se disponía a aterrizar, fue alcanzado por dos misiles disparados desde una colina justo al lado del perímetro del aeropuerto, y se estrelló en los jardines del palacio presidencial. Todos los que iban a bordo murieron.

En cuestión de minutos, el aeropuerto y el perímetro del palacio fueron acordonados por soldados procedentes de un cuartel cercano. Las milicias bloquearon las carreteras que cruzaban la ciudad. Radio Mille Collines dio la noticia de la muerte de Habyarimana. Empezó la matanza.

Nunca hubo pruebas concluyentes que revelasen la identidad de los asesinos de Habyarimana. Los extremistas hutus acusaron al RPF del asesinato y afirmaron que también estaban implicados soldados belgas. El RPF culpó a los extremistas hutus. Los principales sospechosos fueron los miembros de la *akazu*, decididos a acabar con cualquier posibilidad de que se pusiera en práctica lo establecido en los acuerdos de Arusha, lo cual pondría fin a su situación de poder. El asesinato de Habyarimana fue el pistoletazo de salida de un genocidio que habían planeado durante mucho tiempo. En el centro de la conspiración se encontraba el coronel Bagosora, que tomó

el mando esa misma noche, dirigiendo las operaciones. Dos noches antes, en una fiesta en la que se conmemoraba el Día Nacional de Senegal, y a la que asistieron Dallaire y Marchal, Bagosora señaló que "la única solución factible para Ruanda sería la eliminación de los tutsis".

Las primeras víctimas fueron escogidas cuidadosamente. Con unas listas preparadas con mucha antelación, los soldados de la Guardia Presidencial y milicianos de la Interahamwe dieron caza a destacados hutus moderados —políticos, altos funcionarios del Gobierno, abogados, profesores, activistas en favor de los derechos humanos y periodistas independientes—, considerados todos ellos opositores que se interponían en el camino de los *génocidaires*. Entre sus objetivos se encontraba el presidente del Tribunal Constitucional y un ministro que había amenazado con cerrar Radio Mille Collines. Al cabo de una hora de haberse estrellado el avión, las tropas habían rodeado la casa de la primera ministra hutu, Agathe Uwilingiyimana. Sus amigos le pidieron reiteradamente que se escondiese, pero ella se negó, insistiendo en que quería que se retransmitiese por la radio nacional que la autoridad civil estaba bajo control y que se comprometía a acatar los acuerdos de Arusha. Un destacamento de soldados belgas encargados del mantenimiento de la paz fue enviado para escoltarla durante el trayecto entre su casa y los estudios de Radio Ruanda. Les llevó tres horas de negociaciones conseguir que les dejasen atravesar los controles de carretera. Cuando llegaron a casa de Uwilingiyimana, los soldados ruandeses abrieron fuego. Sin poder retirarse, los belgas y Uwilingiyimana esperaron refuerzos en vano. Tras tres horas de espera, la primera ministra y su marido huyeron saltando una tapia del jardín. El mismo día, más tarde, fueron capturados y asesinados. Los diez belgas fueron hechos prisioneros, conducidos a un campamento militar, apaleados, torturados y asesinados.

Al mismo tiempo comenzó la matanza de tutsis. Cientos de destacados tutsis, cuyos nombres y direcciones ya figuraban en listas, fueron apresados en sus casas y luego asesinados. Bandas armadas con porras, machetes y cuchillos fueron

puerta por puerta en busca de víctimas tutsis. Miles fueron apresados en controles de carretera por milicianos que exigían que se les mostrasen los documentos de identidad y que mataban a los tutsis que encontrasen. Los soldados de la UNAMIR de Kigali fueron testigos de multitud de ejecuciones. Un miembro de la UNAMIR, describiendo un incidente sucedido a escasos metros del hotel que servía de cuartel general de la misión, declaró: “Lo sujetó por la camisa y empezó a zarandearlo (...) y entonces, simplemente levantó el machete y le asestó un machetazo en la cabeza (...) lo hizo dos veces, mientras le mirábamos (...) después frotó el machete manchado de sangre contra sus nalgas y se puso a registrar los bolsillos de la víctima (...) todos nos pusimos a gritar al verlo”. No mucho después llegó un volquete con una cuadrilla de presos para recoger los cadáveres de las calles. “Alguien le hizo señas para que se detuviera, sacó a rastras el cadáver de debajo del árbol y lo arrojó al volquete que ya estaba casi lleno, mientras la gente gemía y lloraba. Se podía ver que algunos no estaban muertos”.

En una emisión radiofónica, un líder del Poder Hutu, Froald Karamira, explicó a los oyentes que la guerra contra los tutsis era “responsabilidad de todos” y les instó a “ayudar a las Fuerzas Armadas a acabar el trabajo”. Miles de hutus respondieron al llamamiento, corriendo por las calles de Kigali mientras cantaban “Exterminémoslos a todos”. Radio Mille Collines incitaba directamente al asesinato: “Las tumbas todavía no están bastante llenas”, clamaba. “¿Quién va a hacer un buen trabajo y nos va a ayudar a llenarlas completamente?”

Las matanzas se sucedieron. A las siete de la mañana del 7 de abril, soldados de la Guardia Presidencial llegaron al Centro Christus, un retiro jesuita de Kigali, pidieron documentos de identificación y escogieron a 19 personas para ser ejecutadas, incluidos siete sacerdotes y ocho mujeres jóvenes que hacían ejercicios espirituales. Aquella misma mañana, en otro complejo religioso de Kigali, 60 hombres y niños tutsis fueron apresados y asesinados. Cientos de tutsis, aterrorizados por los tiroteos y las explosiones de la capital, buscaron refugio

entre los sacerdotes católicos en un edificio de las misiones situado sobre una colina en el suburbio de Gikondo, en Kigali. Durante una misa oficiada ante unos 500 tutsis, un escuadrón de la muerte irrumpió en la iglesia. “La milicia empezó a acuchillar a diestro y siniestro”, recordaba un superviviente. “Acuchillaban en los brazos, las piernas, los pechos, las caras y los cuellos”. La matanza se prolongó durante dos horas. Hubo matanzas parecidas por todo el país.

Cuando la magnitud de la masacre se hizo evidente, el líder del RPF, Paul Kagame, advirtió de que sus fuerzas iban a intervenir si no se detenían las matanzas de civiles. Como parte de los acuerdos de Arusha, un batallón de 600 soldados del RPF estaba destacado en Kigali, junto al edificio que albergaba el Parlamento nacional, a poca distancia del centro, para mantener la seguridad de los seguidores del RPF. El grueso de las fuerzas del RPF permanecía en el norte. Más adelante, el 8 de abril, Kagame anunció la vuelta a la guerra y ordenó a su ejército del norte que avanzase hacia la capital.

En medio de la creciente confusión, los gobiernos occidentales se apresuraron a evacuar a sus ciudadanos. El 9 de abril, tropas francesas aterrizaron en el aeropuerto y se dirigieron a la Embajada. La Embajada estaba repleta, no solo de ciudadanos franceses, sino también de miembros de la camarilla de Habyarimana, la *akazu*, a los que Francia había respaldado durante mucho tiempo y que habían estado profundamente involucrados en la planificación del genocidio. Entre ellos se encontraba Madame Agathe Kanzinga, su hermano y alrededor de 30 activistas más, incluido el director de Radio Mille Collines, el profesor Ferdinand Nahimana, responsable de la organización de las emisiones en que se incitaba al odio. Madame Agathe, sus hijos y el resto de su séquito fueron escoltados hasta el primer vuelo que despegó de Kigali. A su llegada a París, Madame Agathe recibió aproximadamente 40.000 dólares del Gobierno francés, suma extraída del presupuesto del Ministerio de Cooperación destinada a la “ayuda urgente a los refugiados de Ruanda”. Dos líderes extremistas fueron recibidos en audiencia por Mitterrand. Según un exministro de Cooperación, Bernard Debré, Mitterrand seguía sintiendo

mucho afecto por el expresidente Habyarimana y su familia y por todo lo que formase parte del antiguo régimen. Entre aquellos a quienes el Gobierno francés se negó a evacuar se encontraban los cinco hijos de la asesinada primera ministra Uwilingiyimana y extrabajadores de la Embajada, en su mayoría tutsis.

El 9 de abril aterrizó un contingente de 250 paracaidistas belgas. Bélgica había hecho denodados esfuerzos ante las Naciones Unidas para conseguir un mandato reforzado para la UNAMIR, que permitiese la intervención militar de fuerzas de la ONU en Ruanda para poner fin a las matanzas. Bélgica estaba dispuesta a incorporar su tropa paracaidista a su fuerza de mantenimiento de la paz que ya se encontraba destacada en Ruanda. Sin embargo, Francia se opuso radicalmente a la propuesta. Así pues, la labor de los paracaidistas belgas quedó limitada a misiones de evacuación, mientras contemplaban junto a los franceses escenas de masacres en las calles. A algunos tutsis que consiguieron encaramarse a camiones que se dirigían al aeropuerto, las milicias les hicieron bajar en controles de carretera y fueron asesinados allí mismo mientras los soldados franceses y belgas se limitaban a mirar cumpliendo órdenes de no intervenir.

Médicos de la organización humanitaria *Médecins Sans Frontières* (MSF) se unieron al éxodo el 10 de abril, después de que 60 personas heridas, presumiblemente tutsis, que esperaban en tiendas de campaña en el hospital central, fuesen sacadas a rastras y asesinadas. “Hemos decidido que no vale la pena seguir trabajando aquí”, declaró un médico de MSF a un periodista norteamericano. “Es inútil cuidar de alguien que va a ser asesinado”.

Cuando el último avión de evacuación despegó de Kigali, los únicos extranjeros que permanecían allí eran los miembros de un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja, decididos a quedarse, y una fuerza asediada de soldados de la UNAMIR, mal equipados y cuya actuación se limitaba al “mantenimiento de la paz”. Los puestos de la UNAMIR pronto se llenaron de miles de personas desesperadas que buscaban refugio huyendo de las bandas de merodeadores.

El futuro de la propia UNAMIR estaba en peligro. Se había creado para supervisar un proceso de paz que resultaba evidente que había fracasado. Los funcionarios de la ONU abogaron por dar por finalizada toda la operación. Existía gran confusión acerca de qué subyacía bajo la violencia. Los extremistas hutus del Gobierno presentaron los asesinatos como una reacción espontánea de los hutus ante el asesinato de su presidente a manos de tutsis. La prensa occidental culpó “del caos y la anarquía” a antiguos enfrentamientos tribales. En Nueva York, los funcionarios de la ONU interpretaron las matanzas como una reanudación de la guerra civil, ante la que poco podían hacer. El secretario general de la ONU, Boutros Boutros Ghali no vio razones para interrumpir una larga gira por Europa. El comandante de la UNAMIR, el general Dallaire, en cambio, no tenía ninguna duda sobre cuál era el origen de la violencia. En un telegrama enviado a Nueva York el 8 de abril describió la situación como una campaña de terror bien planificada y organizada, dirigida por la Guardia Presidencial y dirigida contra los líderes de la oposición, el grupo étnico tutsi, la UNAMIR y otros miembros del personal de la ONU. También explicó lo precaria que era la posición de la UNAMIR. Sus tropas belgas, la columna vertebral de la UNAMIR, fueron desperdigadas por Kigali y quedaron aisladas por los controles de carreteras. No disponían de suministro de electricidad ni de gasolina. Diez soldados en misión de mantenimiento de la paz resultaron muertos y se temía por la seguridad del resto. La UNAMIR solamente tenía provisiones para menos de dos semanas, en algunos lugares solo les quedaba agua potable para dos días y gasolina para tres días como máximo. Apenas les quedaban municiones ni material médico.

Con todo, Dallaire se mantuvo firme en su decisión de que sus hombres no se retirasen. Desde Nueva York, los altos funcionarios de la ONU le dijeron en tres ocasiones —una de ellas el propio Boutros Ghali en la única llamada telefónica que realizó— que hiciese planes para una evacuación, pero Dallaire se negó a ello. Argumentó que, si dispusiese de refuerzos, podría acabar con las matanzas. Cuando fueron enviadas tro-

pas francesas y belgas para rescatar a expatriados y no para restablecer el orden no se lo podía creer. “Nos dejaron que nos las apañáramos solos”, recordó, “sin un mandato ni suministros”.

Lo peor estaba por llegar. El 12 de abril, el Gobierno belga, ante las protestas en el país a causa de la muerte de diez soldados en misión de paz, anunció su intención de retirar a su contingente de la UNAMIR. Al retirarse de sus puestos, los belgas abandonaron a miles de civiles que buscaban protección en ellos, y les dejaron indefensos contra los ataques del Ejército y de los milicianos. En la École Technique Officielle, una escuela técnica del suburbio de Gatonga en Kigali dirigida por los padres salesianos, en la que se refugiaban 2.000 personas, un teniente belga explicó que sus hombres tenían órdenes de retirarse y sugirió que se escabullesen en la oscuridad. Algunos se le acercaron pidiéndole que les disparase antes de dejarles enfrentarse a la muerte a manos de la milicia y sus machetes. Cuando los belgas empezaron a salir subrepticiamente, una multitud echó a correr detrás de sus vehículos suplicando: “No nos abandonéis”. Al cabo de algunas horas casi todos fueron salvajemente asesinados.

Al ver la retirada de los belgas el 19 de abril, Dallaire se sintió profundamente traicionado. “Yo estaba allí cuando despegó el último Hércules (...) y pensé que hacía casi exactamente 50 años que mi padre y mi suegro habían estado luchando en Bélgica para liberar al país de los fascistas, y allí estaba yo, abandonado por los soldados belgas. Los desprecié profundamente por ello (...). Me pareció imperdonable”.

A pesar de estar gravemente debilitada, la UNAMIR continuaba protegiendo a unos 30.000 civiles en sus puestos. No obstante, el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido en Nueva York el 21 de abril, después de que Boutros Ghali hubiese presentado un anodino informe sobre la crisis, decidió que sin el contingente belga la UNAMIR ya no era viable. Aprobó una nueva resolución que establecía la retirada de la mayoría de los soldados encargados del mantenimiento de la paz, y únicamente una fuerza simbólica de 270 hombres con instrucciones de ayudar a conseguir un alto el fuego entre el Gobierno y el

RPF y colaborar en las operaciones de ayuda humanitaria “en la medida de lo posible”. La última esperanza de detener el genocidio había desaparecido.

Al cabo de dos semanas de la muerte de Habyarimana, los *génocidaires* se habían hecho con el control de la Administración del país y de su red de *préfets*, *bourgmestres* y *conseillers*. Se anunció la constitución de un nuevo “gobierno provisional” formado enteramente por fanáticos del Poder Hutu. Los funcionarios que no mostraban gran entusiasmo por la causa fueron destituidos. La radio era utilizada para ridiculizar y amenazar a los administradores y a los líderes políticos locales que llamaban a mantener la calma. Por todo el país se extendió un llamamiento en favor de la “autodefensa” contra los “cómplices”. Matar se convirtió en el negocio principal de toda la jerarquía del poder —el Ejército, la *gendarmerie*, la Policía Comunal, los funcionarios del partido y las autoridades civiles—, siempre con la aprobación del “gobierno provisional”. A los campesinos se les ordenaba y se les engatusaba para que se pusieran “manos a la obra”.

Incluso los líderes religiosos actuaban en connivencia con la campaña del Gobierno, culpando al RPF de la violencia y negándose a denunciar públicamente los asesinatos masivos que se producían en sus propias iglesias. El arzobispo católico, Vincent Nsegiyumba, un antiguo aliado del movimiento del Poder Hutu que había servido como miembro del comité central del MRND durante 14 años, ofreció rápidamente su apoyo al gobierno provisional. Los obispos anglicanos siguieron su ejemplo, haciendo proselitismo de la política del Gobierno.

Muchos miembros del clero se mostraban escandalizados por la complicidad de la Iglesia y se esforzaban por prestar toda la ayuda posible a las familias tutsis que acudían a ellos en tropel en busca de protección. Sin embargo, algunos sacerdotes instigaban y secundaban activamente a los *génocidaires*, ayudándoles a capturar a los tutsis para asesinarlos brutalmente. El rector de la iglesia de Mugonero, el pastor Elizaphan Ntakiturimana, instó a los refugiados tutsis a reunirse en el edificio de la misión. Unos 2.000 se apretujaron

en el hospital cuando los soldados de la Guardia Presidencial acordonaron las instalaciones. La tarde del 15 de abril, se informó a los refugiados de que el hospital iba a ser atacado a la mañana siguiente. Siete pastores escribieron una carta a Ntakiturimana pidiéndole ayuda:

Apreciado líder, pastor Elizaphan Ntakiturimana:

¿Cómo estás? Esperamos que te mantengas firme ante todos estos problemas a los que nos enfrentamos. Nos gustaría informarte de que hemos oído que mañana seremos asesinados junto a nuestras familias. Por tanto, te pedimos que intervengas en nuestro nombre y hables con el alcalde. Creemos que, con la ayuda de Dios, el cual te confió el mando de este rebaño que está a punto de ser destruido, tu intervención será decisiva, del mismo modo que Esther salvó a los judíos.

Te rendimos honores.

Ntakiturimana contestó:

No puedo hacer nada por vosotros. Lo único que podéis hacer es prepararos para morir, porque ha llegado vuestra hora.

Las iglesias de Ruanda en las que los tutsis buscaban refugio desesperadamente se convirtieron en el escenario de continuas masacres. En ellas fueron asesinadas más personas que en ningún otro lugar.

Algunos grupos trataron de organizarse acumulando piedras para defenderse, pero pronto se vieron superados por las milicias y el Ejército que irrumpían en las iglesias lanzando granadas y blandiendo machetes. En muchas iglesias había tantos miles de personas que las matanzas se prolongaban durante varios días. A los que esperaban la muerte se les cortaban los tendones de Aquiles para impedirles escapar. Una superviviente de la masacre de Ntarama del 15 de abril contó su historia a los investigadores:

Un grupo de soldados y miembros de la Interahamue atacaron la iglesia. Agujerearon los muros de la parte de atrás y lanzaron granadas a través de los agujeros. Todo el mundo trató de poner-

se a cubierto. Entonces entró la Interahamue con sus machetes y empezó la masacre. Al menos un soldado uniformado se quedó disparando hacia la iglesia para proteger a la Interahamue hasta que entraron todos y empezaron su "trabajo". Entre los miembros de la Interahamue había mujeres y chicos jóvenes de entre 11 y 14 años, que llevaban lanzas y estacas afiladas. Las emplearon para golpear a muchos niños hasta la muerte.

Mientras daban machetazos, los milicianos comentaban su trabajo, indicándose unos a otros qué heridos tenían que ser rematados. Al cabo de un rato empezaron a discutir sobre si tenían que seguir con los machetazos o empezaban con el saqueo. Decidieron saquear antes de que todos estuvieran muertos (...).

Yo estaba debajo de varios muertos. No me podía mover con tantos cadáveres encima de mí. La Interahamue se marchó pensando que todos estaban muertos.

Cuando, dos meses después, llegaron a Ntarama investigadores de African Rights, la iglesia seguía llena de cuerpos en estado de descomposición. "Era imposible entrar, porque las pilas de cadáveres de la entrada eran muy altas. Ello hacía difícil calcular el número de muertos; pero, mirando a través de la ventana, podía verse que cada centímetro del interior de la iglesia estaba cubierto de cadáveres apilados unos sobre otros".

Los refugiados que huían en dirección a Ntarama fueron atrapados junto a un río. Un superviviente recordaba:

Había miembros de la Interahamue disparando en las dos orillas del río. Los del lado de Ntarama nos ordenaron que nos suicidásemos arrojándonos al río. Muchas personas desesperadas se tiraron al río con la esperanza de evitar una muerte aún más terrible a machetazos y se ahogaron, muchas de ellas con bebés amarrados a la espalda. Conscientes de que les esperaba la muerte, los padres arrojaban a sus hijos al río en un último signo de amor.

Los que nos negamos a suicidarnos corrimos de un lado a otro por la orilla, jugando al escondite con los que nos atacaban.

Las orillas de los ríos se convirtieron en lugares de ejecución habituales, adecuados para deshacerse de los cadáveres. Unos

40.000 cuerpos fueron arrastrados por el río Akagera hasta el lago Victoria.

Los hospitales tampoco eran seguros. “El porcentaje de médicos que se convirtieron en ‘asesinos por excelencia’ era muy alto”, concluyó African Rights. “Muchos de los médicos más capacitados y experimentados del país, tanto hombres como mujeres –incluidos cirujanos, médicos, pediatras, ginecólogos, anestesiastas, especialistas en salud pública y administradores de hospitales– participaron en el asesinato de compañeros tutsis y de pacientes que, heridos y aterrorizados, habían buscado refugio en sus hospitales”. El *British Medical Journal* informó de que algunas de “las matanzas más terribles tuvieron lugar en clínicas de maternidad, donde la gente se refugiaba creyendo que nadie mataría a madres con hijos recién nacidos”.

Habitualmente los profesores denunciaban a sus alumnos a los grupos de la milicia o los asesinaban ellos mismos. Un profesor hutu le contó al periodista francés Patrick de Saint-Exupéry: “Mucha gente fue asesinada aquí. Yo mismo maté a algunos niños (...). El primer año tuvimos 80 niños. Ahora quedan 25. Al resto los matamos o escaparon”. Los activistas a favor de los derechos humanos también estaban implicados. El presidente de una organización humanitaria, Innocent Mazimpaka, junto a su hermano menor, el *bourgmestre* de Gatere, fue acusado de ser responsable de la matanza de 12.200 tutsis en la *commune* de Gatere.

La caza de tutsis continuó semana tras semana, de colina en colina, pueblo a pueblo. Los supervivientes contaban historias de crueldad exagerada. Se obligaba a las madres a ver morir a sus hijos antes de ser asesinadas; los niños eran obligados a matar a sus familias. Una madre de Taba describió cómo, después de que la Interahamue apresase a su familia y matase a todos los hombres, obligó a las mujeres a cavar tumbas para enterrarlos. Los niños también fueron arrojados a las tumbas. “Nunca olvidaré la imagen de mi hijo suplicando que no lo enterrase vivo (...) cada vez que intentaba salir lo golpeaban hacia abajo. Tuvimos que seguir cubriendo el hoyo con tierra hasta que (...) dejaron de moverse”.

Los tutsis eran asesinados por amigos y vecinos, por compañeros de colegio y de trabajo; a los maridos se los obligaba a matar a sus mujeres tutsis si no querían que les matasen a ellos. El periodista norteamericano Bill Berkeley preguntó a un campesino de 47 años de Kibungo, padre de ocho hijos, acerca de la muerte de su cuñado.

Las órdenes de arriba pasaban a los jefes locales, los *conseillers*. Estos tenían listas de los tutsis que tenían que ser asesinados. Simplemente reorganizaban a sus electores(...).

Los líderes del partido y de la milicia reunieron a los hombres del pueblo. Nos dijeron que teníamos una misión. Nos dieron una lista de gente a la que matar. Si nos encontrábamos con alguien que aparecía en la lista lo teníamos que matar(...).

En ocasiones coincidíamos. Matamos a mucha gente entre varios...

En su propio pueblo habían matado a nueve personas. Él había empleado un machete; otros, garrotes.

Conocía a algunos de ellos. Eran vecinos (...).

Los maté porque me obligaron. Tenía que hacerlo o me matarían a mí. Muchos fueron asesinados por negarse a matar (...).

¿Y el asesinato de su cuñado?

No merecía morir. Era un anciano (...). Lo matamos en su casa. Lo sacamos a rastras del dormitorio y lo matamos en la sala de estar. Emmanuel fue el primero en golpear. Era el líder de la milicia. Yo no pude hacerlo. Me quedé allí mirando. No podía hacer nada.

Hacia finales de abril, el holocausto de Ruanda tomó un nuevo rumbo. A medida que las fuerzas del RPF del norte de Ruanda avanzaron hacia el sur, se reunieron en la capital y tomaron el control de las zonas orientales del país, la población hutu que se interponía en su camino huyó en masa hacia la vecina Tanzania por miedo a la venganza por las matanzas

de tutsis en sus distritos natales. En un solo día, un cuarto de millón de personas salió en estampida por la carretera hacia el puente de las cataratas de Rusumo con la intención de cruzar la frontera, dejando tras de sí enormes pilas de machetes, cuchillos y lanzas al borde de la carretera. Entre ellas había líderes del movimiento Poder Hutu y grupos de la Interahamwe decididos a mantener su dominio sobre la población hutu. La difícil situación de estos hutus desplazados atrajo la atención mundial mucho más de lo que lo había hecho el genocidio en que habían participado muchos de ellos. Pronto se puso en marcha una masiva operación de ayuda humanitaria.

En las Naciones Unidas, los miembros del Consejo de Seguridad pasaron por alto las evidentes pruebas de genocidio, ya que, después de la experiencia de Somalia, no querían meterse en otro atolladero en África. Francia, que continuaba tratando de proteger a sus aliados del Poder Hutu, insistió en que la violencia en Ruanda no se trataba de un genocidio, sino que era consecuencia de una guerra civil. Los funcionarios de Estados Unidos hicieron auténticos malabarismos para evitar utilizar la palabra "genocidio", ya que temían que, de lo contrario, según lo establecido en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la ONU de 1948, estarían legalmente obligados a intervenir. El borrador de una declaración enviada al Consejo de Seguridad el 29 de abril, en que se advertía de que el "genocidio" contravenía las leyes internacionales, fue suavizada hasta lograr una versión más aceptable: "El Consejo de Seguridad recuerda que el asesinato de miembros de un grupo étnico con la intención de destruir dicho grupo en parte o en su totalidad constituye un delito sancionable por el derecho internacional". El 4 de marzo, el presidente Clinton, todavía resentido por los acontecimientos de Somalia, declaró: "La primera lección que debemos aprender es que no hay que meterse en estos asuntos y decir, como dijo Estados Unidos cuando entramos en Somalia, 'Puede que todo esté acabado dentro de un mes porque se trata de una crisis humanitaria' (...). Porque estas situaciones de crisis casi siempre están originadas por problemas políticos y a veces por conflictos militares".

El secretario general de la ONU, Boutros Ghali, que falló en Ruanda como había hecho en Somalia, contribuyó a empeorar la situación. Ocho días después de que el Consejo de Seguridad, siguiendo su consejo, votase a favor de la retirada del grueso de las fuerzas de la UNAMIR, propuso que se la reforzase. Su propuesta fue recibida con un silencio de asombro.

Sobre el terreno, el general Dallaire, intentando por todos los medios encontrar una salida en medio del barrizal, acudió a ver al líder del RPF, Paul Kagame, con una propuesta de alto el fuego del "gobierno provisional". Kagame fue muy mordaz. El "gobierno provisional", respondió, no era más que "una camarilla de asesinos". Afirmó que la idea de un alto el fuego había sido concebida por Francia en su nombre.

Reunido de nuevo el 17 de mayo, tras más pruebas de la existencia de un genocidio, el Consejo de Seguridad, que seguía logrando evitar la palabra, aprobó una nueva resolución en la que se autorizaba una segunda fuerza de la UNAMIR -UNAMIR 2- para Ruanda, compuesta por 5.500 soldados. Sin embargo, todo ello no fue más que puro teatro. No se había determinado qué tropas y qué material se destinarían a la operación, ni existían planes para que fuesen transportados por aire a Ruanda. Ni siquiera había un acuerdo sobre la estrategia que seguiría la UNAMIR 2. Dallaire, desesperado por acabar con las matanzas, propuso que los refuerzos aterrizasen en Kigali, desde donde podrían desplegarse rápidamente por todo el país. Los dirigentes estadounidenses, temerosos de que la UNAMIR se viese atrapada en medio de los combates entre el RPF y las fuerzas del Gobierno, se mostraron partidarios de desplegar las tropas en la periferia de Ruanda, donde podrían establecer zonas seguras para proteger a los civiles. "Enviar una fuerza de la ONU a la vorágine de Ruanda sin un plan de operaciones seguro sería una locura", argumentó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Madeleine Albright. Las discusiones y los reproches continuaron durante semanas. Recordando estos hechos, el representante neozelandés del Consejo de Seguridad, Colin Keating, observó: "Mientras miles de seres humanos eran asesinados a mache-

tazos cada día, los embajadores discutían esporádicamente durante semanas sobre tácticas militares”.

El 8 de junio, dos meses después de la primera masacre, el Consejo de Seguridad presentó por fin una autorización para la UNAMIR 2. Incluso hizo mención de la palabra “genocidio”, pero no en toda su crudeza, sino envuelta en la frase “actos de genocidio”. Cuando, en vista de anteriores declaraciones, se le pidió que explicase la postura estadounidense, un portavoz del Departamento de Estado respondió: “tenemos razones para creer que han tenido lugar actos de genocidio”.

“¿Cuántos actos de genocidio son necesarios para que exista genocidio?”, preguntó un periodista.

“Esa es una pregunta que no estoy en situación de contestar”, respondió.

Pero la UNAMIR 2 había nacido muerta. Antes de llevar a cabo ninguna actuación, Francia anunció su propia intervención. Los franceses estaban cada vez más alarmados ante la perspectiva de que el “gobierno provisional” pudiese ser derrotado. A finales de mayo, el RPF se había hecho con el control de grandes zonas de Kigali, incluido el aeropuerto, y de más de la mitad del país. El “gobierno provisional”, mientras tanto, se había retirado a su cuartel general de Gitarama, llevándose el tesoro público, incluidas las reservas de oro y moneda extranjera. El 12 de junio el RPF tomó Gitarama, y obligó a los ministros a huir a Gisenyi, la plaza fuerte del Poder Hutu en el noroeste. Mitterrand estaba decidido a impedir la victoria del RPF en Ruanda, incluso si para ello tenía que seguir colaborando con asesinos genocidas. Según Human Rights Watch, entre mayo y junio, en la ciudad de Goma, en la frontera con Zaire, se entregaron al Ejército ruandés envíos de armas procedentes del Gobierno francés o de empresas francesas con licencia gubernamental en cinco ocasiones.

El 14 de junio, dos días después de la caída de Gitarama, Mitterrand autorizó un plan para enviar tropas francesas a Ruanda, disfrazándolo de “misión humanitaria”. “Actuaremos pase lo que pase. Cada hora cuenta y ahora es solo cuestión de horas y días”, dijo. “Las luchas son cada vez más encarnizadas y ya no se puede esperar más”.

En cuestión de días, Francia organizó una fuerza expedicionaria—la *Opération Turquoise*—diseñada más con fines militares que con objetivos “humanitarios”. Consistía en 2.500 soldados e incluía unidades de comando, fuerzas especiales, morteros, cien vehículos acorazados, diez helicópteros, cuatro aviones de ataque a tierra y cuatro cazas de reconocimiento. En París, los oficiales hablaban claramente de “romper la espalda al RPF”. Entre los oficiales destinados a la operación se encontraban exconsejeros militares del Gobierno de Habyarimana. Se elaboraron mapas que señalaban una zona controlada por los franceses que incluía la mayor parte del oeste de Ruanda y partes de la ciudad de Kigali, todavía en manos del “gobierno provisional”.

Cuando Mitterrand puso la *Opération Turquoise* a disposición de las Naciones Unidas, Boutros Ghali no dejó escapar la oportunidad. Mientras que los estadounidenses seguían regateando los costes del mantenimiento de la paz, Francia no solo estaba dispuesta a aportar tropas sino también a hacerse cargo de la factura. En Kigali, sin embargo, Dallaire era reacio a cualquier intervención por parte de Francia, ya que creía que su intención era salvar al “gobierno provisional” de la derrota y dividir Ruanda en dos. Sabedor de las entregas secretas de armas a los *génocidaires*, Dallaire señaló en privado: “Si aterrizan aquí para entregar sus malditas armas al Gobierno, haré derribar sus aviones”. Sin embargo, a pesar de que hubo bastantes votos en contra, el Consejo de Seguridad dio su aprobación a la *Opération Turquoise* el 22 de junio.

Al día siguiente, los soldados franceses cruzaron la frontera de Ruanda desde la ciudad fronteriza de Bukavu, en Zaire. Fueron recibidos como héroes por la población hutu y la Interahamue. Había pancartas en las que se leía “Vive la France” y alabanzas a Mitterrand. Había *tricolores* francesas desplegadas por todas partes, incluso en los vehículos del Ejército ruandés. Retransmitiendo desde Gisenyi, Radio Mille Collines se dirigió a “vosotras, chicas hutus, lavaos y poneos un vestido bonito para dar la bienvenida a nuestros aliados franceses. Todas las chicas tutsis están muertas, así que esta es vuestra oportunidad”.

Un destacamento de soldados franceses acompañado por periodistas se dirigió a Nyarushishi, un campamento en el que 8.000 refugiados tutsis habían sobrevivido bajo protección policial. Pasando bastante desapercibido, un segundo destacamento formado por 200 soldados de elite entró en Gisenyi, donde se encontraba el cuartel general del “gobierno provisional”, cruzando a través de la ciudad fronteriza de Goma, y levantó un campamento allí, preparado para defender a la ciudad de los ataques del RPF. En la zona no quedaban tutsis a los que proteger. Un hutu residente en Gisenyi le dijo a un periodista francés: “Aquí nunca hemos tenido muchos tutsis y a los que había los matamos al principio sin armar demasiado jaleo”.

En algunos lugares, la llegada de los franceses hizo aumentar la vorágine de asesinatos, ya que las milicias se apresuraban a finalizar su “trabajo” antes de que les detuvieran. A pesar de todo, los franceses no parecían muy interesados en desarmar a las milicias o dismantelar los controles de carretera. Cuando le preguntaron por qué sus tropas no actuaban, el coronel Didier Thibault, nombre falso utilizado por el coronel Didier Tauzin para ocultar su pasado como consejero del ejército ruandés, respondió: “El Ejército francés no está autorizado a desarmar a las milicias o dismantelar los controles de carretera aunque constituyan una amenaza para las vidas de los civiles”. Según Gérard Prunier, asesor militar de la *Opération Turquoise*, el coronel Thibault “se moría por atacar al RPF”.

En un principio, Francia tenía intención de presionar para llegar hasta Kigali, pero los riesgos eran demasiado grandes. El 4 de julio Thibault ordenó a sus tropas que trazasen “una línea en la arena” en Gikongoro, avisándoles de que, si el RPF atacaba, “no habría clemencia”. Como no lograron llegar a Kigali, los franceses optaron por establecer una “zona humanitaria” que abarcaba el cuadrante suroeste de Ruanda, y abandonaron el noroeste y el “gobierno provisional” de Gisenyi. A medida que la magnitud de las atrocidades se iba haciendo cada vez más evidente, la estrategia francesa tuvo un final denigrante. Las tropas francesas desplegadas sobre el terreno se sintieron traicionadas ante las repugnantes pruebas

de masacres con las que se encontraron. “Aquí no hay ni un solo hutu herido, solamente hay tutsis masacrados”, informó un soldado. “Nos han engañado”, dijo un sargento mayor mientras contemplaba a un grupo de refugiados tutsis heridos y hambrientos. “Esto no es lo que nos han hecho creer. Nos dijeron que los tutsis estaban matando a los hutus. Pensábamos que los hutus eran los buenos chicos y las víctimas”. Al principio se habían sentido complacidos por el recibimiento de las milicias, pero ahora les repugnaba. “Ya he recibido suficientes aplausos de asesinos”, señaló un soldado. Un oficial francés que había sido instructor de los soldados de la Guardia Presidencial se sintió tan horrorizado ante los crímenes cometidos por los hombres a los que había entrenado que se derrumbó y se echó a llorar.

El 4 de julio, el RPF tomó Kigali. A los pocos días de la caída de la capital de Ruanda, mientras las fuerzas del RPF avanzaban sobre los últimos baluartes del Poder Hutu en el noroeste, los *génocidaires* organizaron un éxodo masivo de la población hutu a través de la frontera con Zaire. En sus últimas emisiones desde Ruanda, Radio Mille Collines propagó el miedo y el terror, proclamando que el RPF eran guerreros diabólicos que los iban a matar a todos. Pueblos enteros dirigidos por gobernantes locales se esfumaron. Las carreteras que conducían a Zaire quedaron colapsadas por cientos de miles de hutus en camiones, coches, bicicletas o a pie, que llevaban consigo su ganado y todas las pertenencias que podían acarrear. A los edificios se les arrancaron los marcos de las ventanas, los pomos de las puertas y las láminas de hierro corrugado. Un cooperante internacional que contemplaba el éxodo en la frontera cerca de Goma observó: “Era como si todo el país se estuviera vaciando”. En dos días, alrededor de un millón de personas cruzó la frontera con Zaire. “Formaban una fila silenciosa, una fila larga y negra de personas que avanzaban en silencio, como autómatas”. Entre ellas se encontraban los milicianos y los militares que quedaban, llevaban consigo sus armas y equipos. “Aunque ellos [el RPF] hayan conseguido una victoria militar no conseguirán el poder”, declaró un

destacado ideólogo hutu. “Nosotros tenemos a la población. Ellos solo tienen balas”.

Muchos destacados *génocidaires*, incluido en coronel Bagosora, pasaron a través del “refugio seguro” francés, pero los franceses no hicieron ningún intento por detenerlos. Un portavoz de Mitterrand lo explicó: “Nuestro mandato no nos autoriza a arrestarlos bajo nuestra propia autoridad. Eso debilitaría nuestra neutralidad, la principal garantía de nuestra eficacia”. Así que los franceses protegieron a los organizadores del genocidio hasta el final. La comunidad internacional, que había ignorado el genocidio durante mucho tiempo, al ver en televisión las imágenes del éxodo hutu, se apresuró a acudir en ayuda de los “refugiados” hutus apretujados en campamentos minados por las enfermedades a lo largo de la frontera de Zaire, sin alimentos ni refugio. El presidente Clinton se subió al carro y describió los campos de “refugiados” como la peor crisis humanitaria en espacio de una generación. En un ardid publicitario, aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos organizaron un suministro aéreo de ayuda. Unas 150 organizaciones de ayuda humanitaria acudieron al lugar. Las Naciones Unidas, incapaces de organizar una misión para impedir el genocidio, no tenían ahora dificultades para conseguir un millón de dólares diario para destinarlo a la crisis de refugiados organizada por los *génocidaires* en su propio beneficio.

El 18 de julio, después de que cayese el último bastión del Poder Hutu, Kagame declaró el fin de la guerra civil. Al día siguiente tomó posesión un nuevo gobierno de unidad nacional formado por representantes de todos los principales partidos excepto el MRND. Doce de los 18 ministros eran hutus. El nuevo presidente, Pasteur Bizimungu, era un pariente hutu de Habyarimana que se había opuesto a él; Paul Kagame fue nombrado vicepresidente.

La victoria del RPF puso fin al genocidio. En el plazo de 100 días 800.000 personas (unas tres cuartas partes de la población tutsi) habían sido brutalmente asesinadas. Se había asesinado a más personas y en menos tiempo que en ninguna otra matanza de la historia. Los tutsis que habían esca-

pado del holocausto aparecieron andrajosos y hambrientos después de haber pasado meses ocultos en cuevas, pantanos y selvas, o salieron arrastrándose de debajo de cobertizos y de dentro de armarios y desvanes. Muchos se habían salvado gracias a la ayuda de hutus. “Cuando salí, no había pájaros”, dijo un superviviente que había permanecido escondido durante el genocidio. “Brillaba el sol y el hedor de la muerte lo envolvía todo”.

Todo el país había sido arrasado. Los hospitales y las escuelas habían sido destruidos o saqueados, igual que los centros públicos; no había policía; la hacienda pública estaba vacía; los servicios públicos como la electricidad, el agua y el teléfono no existían; la cosecha de un año se había malogrado. Había zanjas llenas de cadáveres en descomposición por todas partes. Casi dos millones de las personas que se encontraban en el país eran refugiados, desarraigados de sus hogares. Según el Banco Mundial, el genocidio había convertido a Ruanda en el país más pobre de la tierra.

Con todo, el conflicto distaba mucho de haber acabado. Desde su nueva base de Zaire, apoyados inconscientemente por la ayuda humanitaria internacional, los *génocidaires* se habían reagrupado y planeaban su regreso. La misma camarilla de políticos hutus, *préfets*, *bourgmestres* y oficiales del Ejército, que había organizado el genocidio, utilizaba ahora el control que ejercía en los campamentos de refugiados y sobre la distribución de alimentos para conseguir fondos y comprar armas para una nueva ofensiva. Desde el exilio, el coronel Bagosora juró “librar una batalla que será larga y causará muchas muertes, hasta que la minoría tutsi esté acabada y sea expulsada del país”.

Esta nueva fase del conflicto iba a continuar llenando de tragedias a Ruanda. Además iba a comportar el desmoronamiento del régimen de Mobutu en Zaire.